El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta Sala.

*ORALIDAD:*

Providencia: Sentencia de Segunda Instancia, jueves 23 de marzo de 2017..

Proceso: Ordinario Laboral – Modifica sentencia que accedió a las pretensiones

Radicación No: 66001–31-05–004-2015-00450-01

Demandante: Ludilvia Salgado Arenas

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones

Juzgado de origen: Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares

Tema a tratar: **DE LA MUTACIÓN DE LA PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ POR HIJO DISCAPACITADO A LA DE VEJEZ ORDINARIA DEFINITIVA:** Como es sabido, el espíritu teleológico de la pensión especial de vejez por hijo discapacitado contenida en el inciso 2º del parágrafo 4º del artículo 9º de la Ley 797/2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100/93, es otorgar a las madres o padres trabajadores que han alcanzado el mínimo de semanas necesario para acceder a la pensión ordinaria de vejez, independientemente de la edad, una prestación económica que les permita ocuparse de manera exclusiva de los cuidados y necesidades de sus hijos inválidos, relevándolos de tener que ejercer una actividad laboral para cubrir las obligaciones económicas de ambos.

La continuidad de dicho beneficio pensional, se supedita a que el padre o madre no se reincorporen a la fuerza laboral y, que el hijo (a) discapacitado permanezca en ese estado y dependa del padre o de la madre, pues de lo contrario, el pago de la prestación será suspendido.

Si bien dicha prestación sólo se incorporó al Sistema General de Pensiones a través del artículo 9º de la Ley 797/03 que modificó el 33 de la Ley 100/93, es menester aclarar que no se trata de una prestación ajena a la pensión de vejez del régimen de prima media, pues el legislador la consagró como una de las prestaciones para cubrir dicha contingencia, tal como se observa del Título II, Capítulo II de la Ley 100 de 1993, que consagró además, la pensión ordinaria de vejez y la anticipada por invalidez.

Bajo esa perspectiva, no puede dejarse de lado que el legislador con el miras a proteger expectativas legítimas, estableció en la Ley 100, artículo 36, un régimen de transición en virtud del cual, se mantenían vigentes para ciertos grupos, las condiciones establecidas en el régimen anterior para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, de modo que, dicha excepción perteneciente al régimen de prima media con prestación definida por disposición del artículo 31 ibídem[[1]](#footnote-1), trae como consecuencia que dicha protección deba ser tenida en cuenta al momento de estudiar el reconocimiento de la pensión especial de vejez por hijo discapacitado, en torno a la densidad de cotizaciones, por cuanto la misma se conecta en forma inescindible con el derecho a la pensión de vejez, y por ende, no puede desligarse de la definición de la situación jurídica del afiliado amparado por tal excepción.

Así las cosas, se considera que la pensión especial a la que se ha venido haciendo referencia, lejos despojar a sus beneficiarios de las prerrogativas contenidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cobijados por los supuestos de hecho allí dispuestos, fue creada con un propósito esencial y especifico, de anticipar el goce de la pensión de vejez una vez el afiliado (a) cumple con el mínimo de semanas necesarias en el régimen de prima media para acceder a la pensión ordinaria de vejez, sin consideración de la edad, en aras de que aquel pueda brindar los cuidados especiales que requiere su hijo discapacitado y apoye su proceso de rehabilitación.

Luego entonces, resulta razonable sostener que el otorgamiento de este tipo de prestación especial no impide que a los beneficiarios del régimen de transición, una vez acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la pensión ordinaria de vejez, cuya finalidad es proteger los riesgos propios de la ancianidad, se les apliquen las condiciones propias del régimen anterior al cual se encontraban afiliados antes de la vigencia del Sistema General de Pensiones, el cual les otorga la posibilidad de obtener la gracia pensional con un monto más favorable, como quiera que esa situación jurídica concreta no puede ser desconocida, so pretexto de la prevalencia del principio de inescendibilidad previsto en el artículo 288 de la Ley 100/93, pues se itera, se trata de la misma pensión de vejez contenida en el régimen de prima media.

AUDIENCIA PÚBLICA:

En Pereira, hoy veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017), siendo las ocho y quince de la mañana (8:15 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia las magistradas y el suscrito magistrado de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran formalmente abierto, que tiene por objeto tramitar el recurso de apelación interpuesto por la vocera judicial de la parte demandante y el grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad demandada frente a la sentencia proferida el 8 de abril de 2016 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por *Ludilvia Salgado Arenas*contra la *Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones*.

*IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES:*

1. *INTRODUCCIÓN*

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de introducción se tiene que la demandante pretende que se declare que tiene derecho a la aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en consecuencia, se condene a la entidad demandada al reconocimiento y pago de la pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, a partir del 4 de octubre de 2010. Así mismo, que se condena a la entidad a convertir la pensión especial de vejez por hijo inválido a la de vejez de la norma citada, a reliquidar el IBL aplicando una tasa remplazo del 81%, y a cancelar las diferencias entre el valor que la entidad viene reconociendo y el que realmente debe percibir. Pretende además, el reconocimiento y pago del incremento pensional del 7 % por persona a cargo, a partir del 4 de octubre de 2010, junto con la indexación de las condenas y las costas del proceso.

Las aludidas pretensiones descansan en que mediante Resolución No. 6756 del 27 de julio de 2007, el ISS le reconoció la pensión especial de vejez por hija inválida, en cuantía de $ 433.358 a partir del 1° de agosto de 2006, liquidada con un IBL de $654.620 y una tasa de remplazo del 66.20 %, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley 100/93; que nació el 4 de octubre de 1955, por lo que al 1° de abril de 1994 tenía 39 años de edad; que cotizó al régimen pensional administrado por el antiguo ISS, hoy Colpensiones, un total de 1.131 semanas de aportes, de las cuales más de 1.000 lo fueron antes de la expedición del Acto Legislativo 01/2005; que su hija Clara Inés Ospina Salgado depende económicamente de ella, como lo reconoció la entidad en el acto administrativo que reconoció el derecho a la pensión especial de vejez. Por último, indica que el 13 de julio de 2015 presentó la reclamación ante la entidad demandada, tendiente a obtener la conversión de la pensión en la forma acá pretendida y la reliquidación de la misma, sin que a la fecha hubiese recibido respuesta.

Admitida la demanda se corrió traslado a Colpensiones, quien allegó escrito oponiéndose a las pretensiones de la demanda, por considerar que la pensión de vejez solicitada es incompatible con la pensión especial de vejez por hijo inválido que viene percibiendo la actora. En su defensa, formuló como excepciones de fondo las que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”.

1. *SENTENCIA DEL JUZGADO*

El Juzgado de conocimiento, mediante fallo del 8 de abril de 2016, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declarando que la señora Ludivia Salgado Arenas, es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100/93, y por ende, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 14 de julio de 2015, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, y al pago del incremento pensional del 7 % por persona a cargo. En consecuencia, condenó a Colpensiones a pagar en pro de la actora, las sumas de $7`477.977 y $439.468, a título de retroactivo de las mesadas y del incremento pensional causados desde el 14 de julio de 2015 al 31 de marzo de 2016. Negó las demás pretensiones y autorizó a Colpensiones a descontar los valores pagados a la actora por concepto de pensión especial de vejez por hijo inválido, a partir del reconocimiento de la pensión de vejezacá reconocida.

En la motiva, indicó la a-quo que pese a que en virtud del principio de inescendibilidad,no es viable convertir la pensión especial de vejez por hijo discapacitado que regula la Ley 100/93, en la de vejez del Acuerdo 049 de 1990, sí procede el análisis del derecho a la pensión de vejez en los términos solicitados en la demanda, toda vez que la pensión especial de vejez reconocida a la actora, es una prestación eminentemente temporal, por lo que no impide que la afiliada pueda autónomamente acceder al derecho a la pensión de vejez, bajo el amparo del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100/93.

Respecto al disfrute de la gracia pensional, indicó que procedía a partir de la fecha de solicitud de pago de la pensión, por ser el acto declarativo de la voluntad de la afiliada tendiente a desafilarse del sistema y obtener el reconocimiento de la prestación.

En cuanto al incremento pensional solicitado, concluyó que conforme las pruebas allegadas al plenario, quedó acreditado que la actora tiene a cargo el autocuidado y sostenimiento económico de su hija discapacitada, Clara Inés Ospina Salgado, tal como fue aceptado por la entidad en el acto administrativo que le reconoció el derecho a la pensión especial de vejez.

Contra la anterior determinación, se alzó la vocera judicial de la demandante, en orden a que tenga como fecha del disfrute de la pensión, el momento en que la demandante causó el derecho, por reunir los requisitos de edad y tiempo de cotizaciones exigidos en el Decreto 758 de 1990.

Igualmente, de conformidad con lo indicado en el artículo 69 del Estatuto Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, se dispuso la consulta de la decisión por ser desfavorable a la entidad demandada.

*Del problema jurídico:*

*¿Tiene la demandante derecho a la pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990? En caso positivo,*

*¿A partir de qué fecha debe otorgarse el reconocimiento de la prestación?*

*¿Tiene derecho la demandante al reconocimiento y pago del incremento pensional del 7% por persona a cargo?*

*Alegatos en esta instancia*:

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar la apelación y la consulta, se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia. Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las siguientes:

*III.CONSIDERACIONES*

*Desarrollo de la problemática planteada.*

Como es sabido, el espíritu teleológico de la pensión especial de vejez por hijo discapacitado contenida en el inciso 2º del parágrafo 4º del artículo 9º de la Ley 797/2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100/93, es otorgar a las madres o padres trabajadores que han alcanzado el mínimo de semanas necesario para acceder a la pensión ordinaria de vejez, independientemente de la edad, una prestación económica que les permita ocuparse de manera exclusiva de los cuidados y necesidades de sus hijos inválidos, relevándolos de tener que ejercer una actividad laboral para cubrir las obligaciones económicas de ambos.

La continuidad de dicho beneficio pensional, se supedita a que el padre o madre no se reincorporen a la fuerza laboral y, que el hijo (a) discapacitado permanezca en ese estado y dependa del padre o de la madre, pues de lo contrario, el pago de la prestación será suspendido. De ahí que sea dable entender que la pensión anticipada de vejez por hijo discapacitado, se paga mientras se mantengan las condiciones que le dieron origen a la prestación, salvo que ocurra alguna de las eventualidades descritas para la pérdida de la pensión.

Si bien dicha prestación sólo se incorporó al Sistema General de Pensiones a través del artículo 9º de la Ley 797/03 que modificó el 33 de la Ley 100/93, es menester aclarar que no se trata de una prestación ajena a la pensión de vejez del régimen de prima media, pues el legislador la consagró como una de las prestaciones para cubrir dicha contingencia, tal como se observa del Título II, Capítulo II de la Ley 100 de 1993, que consagró además, la pensión ordinaria de vejez y la anticipada por invalidez.

Bajo esa perspectiva, no puede dejarse de lado que el legislador con miras a proteger expectativas legítimas, estableció en la Ley 100, artículo 36, un régimen de transición en virtud del cual, se mantenían vigentes para ciertos grupos, las condiciones establecidas en el régimen anterior para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, de modo que, dicha excepción, trae como consecuencia que dicha protección deba ser tenida en cuenta al momento de estudiar el reconocimiento de la pensión especial de vejez por hijo discapacitado, en torno a la densidad de cotizaciones, por cuanto la misma se conecta en forma inescindible con el derecho a la pensión de vejez, y por ende, no puede desligarse de la definición de la situación jurídica del afiliado amparado por tal excepción.

Así las cosas, se considera que la pensión especial a la que se ha venido haciendo referencia, lejos despojar a sus beneficiarios de las prerrogativas contenidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cobijados por los supuestos de hecho allí dispuestos, fue creada con un propósito esencial y especifico, de anticipar el goce de la pensión de vejez una vez el afiliado (a) cumple con el mínimo de semanas necesarias en el régimen de prima media para acceder a la pensión ordinaria de vejez, sin consideración de la edad, en aras de que aquel pueda brindar los cuidados especiales que requiere su hijo discapacitado y apoye su proceso de rehabilitación, y siempre que estas dos circunstancias (no reincorporación a la fuerza laboral y discapacidad del hijo), permanezcan.

Luego entonces, resulta razonable sostener que el otorgamiento de este tipo de prestación especial no impide que a los beneficiarios del régimen de transición, una vez acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la pensión ordinaria de vejez, cuya finalidad es proteger los riesgos propios de la ancianidad, se les apliquen las condiciones propias del régimen anterior al cual se encontraban afiliados antes de la vigencia del Sistema General de Pensiones, el cual les otorga la posibilidad de obtener la gracia pensional con un monto más favorable, como quiera que esa situación jurídica concreta no puede ser desconocida, so pretexto de la prevalencia del principio de inescendibilidad previsto en el artículo 288 de la Ley 100/93, pues se itera, se trata de la misma pensión de vejez contenida en el régimen de prima media.

En el caso puntual, no milita discusión en torno a que el antiguo ISS le reconoció a la demandante la pensión especial de vejez por hijo discapacitado, a través de la Resolución 6756 de 2007, a partir del 1º de agosto de 2006 y en cuantía de $ 433.358 (ver fl.15), por lo que deberá la Sala determinar si la actora tiene derecho a que tal prestación mute en la pensión ordinaria vitalicia de vejez consagrada en el artículo 049 de 1990, gracias al puente que le tiende el artículo 36 de la Ley 100/93, determinado régimen de transición, por cuanto éste no se pierde por el acogimiento a la pensión especial por hijo inválido.

Para el efecto, se advierte en primer lugar, que la actora ostenta la calidad de beneficiaria del régimen de transición, por cuanto su natalicio se dio el 4 de octubre de 1955, razón por la que al 1º de abril de 1994 tenía más de 35 años de edad, amén, de que aplica con satisfacción el Acto Legislativo 01/05, como quiera que al 29 de julio de dicho año, reunía más de 750 semanas sufragadas, aunado a que su derecho pensional lo consolidó el 4 de octubre de 2010.

El artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, establece los presupuestos para acceder a la pensión por vejez, siendo ellos puntualmente dos: (i) que en el caso de los hombres alcancen los 60 años de edad y (ii) que tengan 1.000 semanas cotizadas en cualquier tiempo o 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad.

En cuanto al requisito de la edad, se reunió el 4 de octubre de 2010, cuando la demandante arribó a 55 años de edad. Frente a las cotizaciones, no se discute que sufragó más de 1.000 en toda su vida laboral, las cuales le sirvieron de base para el reconocimiento de la pensión especial por hijo discapacitado, por lo que es indubitable que la demandante le asiste el derecho a que dicha prestación especial reconocida a través de la Resolución 6756 de 2007, mute a la pensión ordinaria vitalicia.

En consecuencia, la Sala modificará el ordinal 1º de la providencia en ese sentido, sin que con ello se afecte el principio de la no reformatio in pejus, pues la operadora judicial accedió al reconocimiento de la pensión ordinaria de vejez, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 049 de 1990, empero, lo hizo por virtud del análisis propio e independiente de dicha prestación, sin consideración a la pensión especial que por hijo discapacitado viene percibiendo la actora.

En cuanto a la fecha de disfrute de la pensión ordinaria de vejez, aspecto que fue materia de recurso de apelación por la parte actora, es preciso indicar que pese a las distintas posiciones que jurisprudenciales que se han fijado en torno al tema, el órgano de cierre de la especialidad laboral en reciente pronunciamiento dejó sentado que si bien el disfrute de la pensión está condicionado a la desafiliación formal del sistema, al tenor de lo preceptuado en los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, existen casos en los que se presentan situaciones excepcionales que permiten deducir la voluntad del afiliado de no seguir cotizando al sistema.

Así por ejemplo ha reconocido que la desafiliación al sistema pensional, se puede presentar de manera excepcional ante la falta de reporte de dicha novedad, y se infiere de las circunstancias que rodean cada caso en particular, pues estas disposiciones (arts. 13 y 35 Ado. 049/1990), "*admiten un entendimiento conforme al cual la voluntad del afiliado de no continuar afiliado al sistema, manifestada mediante actos externos, es un parámetro válido para establecer la fecha de inicio de disfrute de la pensión*” (sentencia SL 5603, de 6 de abril 2016).

De allí, entonces, que la ameritada jurisprudencia insiste que “*dicha situación de desafiliación, puede ser igualmente cognoscible mediante otros actos exteriores e inequívocos, como lo puede ser la suspensión definitiva de los aportes o la manifestación expuesta en tal sentido*”.

En el caso puntual, se tiene que la demandante cumplió la edad mínima el 4 de octubre de 2010, calenda para la cual ya tenía reunido el número de semanas necesarias para acceder al derecho pensional. Igualmente, se tiene certeza de que cotizó hasta el 30 de junio de 2014, y que la solicitud pensional tendiente a obtener la transformación de la pensión especial que venía recibiendo a la de vejez definitiva, así como la reliquidación de la mesada pensional, fue presentada el 13 de julio de 2015 (fls.178 y 67).

Acorde con lo anterior, son dos los factores que permiten inferir que la demandante tenía la intención de no seguir afiliada al sistema pensional, uno, la cesación definitiva de sus cotizaciones, y otro, la solicitud pensional, de modo que, la desafiliación en este asunto para efectos de obtener la pensión definitiva de vejez, operó a partir del 1° de julio de 2014, fecha en que cesó en sus cotizaciones, por lo que a partir de ese momento podía empezar a disfrutar del derecho.

En este punto, es preciso indicar que no tiene trascendencia el hecho de que la demandante haya efectuado cotizaciones entre el 1° de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014, pues tales aportes se hicieron en un periodo en el que la demandante ya tenía consolidado el derecho a la pensión ordinaria de vejez, los cuales indubitablemente le sirven para incrementar el monto de dicha prestación.

Se modificará, por ende, el ordinal 2° de la sentencia, indicando que el disfrute de la pensión ordinaria de vejez procede a partir del 1° de julio de 2014.

Efectuado el cálculo respectivo del Ingreso Base de Liquidación con el promedio de las sumas devengadas en los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, al tenor de lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley 100/93, pues a la actora le hacían falta más de 10 años para consolidar el derecho a la pensión ordinaria de vejez al 1º de abril de 1994, se obtiene como resultado un total de $ 847.745, que al aplicarle la tasa de remplazo del 87 %, por haber cotizado válidamente un total de 1.227,57 semanas de aportes en toda su vida laboral, arroja una mesada pensional para el año 2014 de $737.539, guarismo que resulta ser inferior al calculado por la a-quo, en cuantía de $768.041, razón por la que en virtud del grado jurisdiccional de consulta que opera en favor de la entidad demandada, se modificará este punto, aclarando además que el valor de la mesada pensional para el año 2017, equivale a $863.228.

En aras de concretar el valor de la diferencia pensional generada entre la mesada que venía recibiendo y la acabada de establecer, desde el 1° de julio de 2014 al 28 de febrero de 2017, es decir, incluyendo el reajuste causado hasta la emisión de este proveído, el mismo asciende a $4´499.299, conforme se ilustra en el cuadro elaborado por la Sala, que se pone de presente a los asistentes y hará parte integrante del acta que se suscriba con ocasión de esta diligencia.

En ese orden, habrá que modificarse el ordinal 3º de la sentencia y revocar el 4º, en tanto que la sentenciadora de primer grado dispuso la cancelación total de las mesadas pensionales y autorizó a la entidad demandada descontar lo pagado a título de pensión especial de vejez, cuando lo correcto en estos casos es calcular de manera concreta el valor de la diferencia pensional surgida entre lo cancelado por la entidad y la mesada reliquidada.

No prospera la excepción de prescripción, en la medida en que en los términos del artículo 151 del C.P.T y S.S., no transcurrieron más de tres años desde que la obligación acá reclamada se hizo exigible, y la interposición de la demanda, incoada el 26 de agosto de 2015, según consta en el folio 15.

En relación con la condena al pago del incremento pensional por persona a cargo contenido en el artículo 21 de la Ley 100/93, conviene precisar que si bien la norma actual que regula el tema de la seguridad social nada dice al respecto, tal silencio legal no se traduce indefectiblemente en que los incrementos pensionales hayan desaparecido o perdido vigencia.

En efecto, son múltiples los pronunciamientos del máximo órgano de cierre de la jurisdicción laboral, tanto en sede ordinaria como de tutela, en el sentido de que el incremento pensional por personas a cargo contenido en la norma mencionada aún conserva vigencia con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, por aplicación del régimen de transición, sin que, su contenido con arreglo al artículo 31 de la Ley 100 riña en forma directa o indirecta con los postulados de ésta, pues en contraste, su aplicación encuentra respaldo en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política.

Lo anterior implica, necesariamente, que no al no haber sido reguladas las adendas reclamadas por la Ley 100 de 1993, su permanencia en el ordenamiento de la seguridad social se impone no sólo para los pensionados que accedieron por derecho propio a la pensión de vejez, con base en el Acuerdo 049 de 1990, sino también a quienes accedieron al mismo derecho, con amparo en esa normatividad, por régimen de transición.

Dichos incrementos pensionales se hacen exigibles desde el momento en que se efectúa el reconocimiento de la prestación pensional. Naturalmente, son imprescriptibles, en la medida en que tales adendas no hacen parte integrante de la prestación pensional, por cuanto no nacen de manera automática y están sometidos al cumplimiento de unos requisitos, que pueden ser o no cumplidos. Así lo ha señalado reiteradamente la Sala de Casación Laboral entre otras, en sentencia No. 45197 de 2015.

En el sub-lite, se tiene que las condiciones contenidas en la norma para el reconocimiento del incremento pensional reclamado, quedaron evidenciadas de manera fehaciente con la prueba documental adosada al plenario y la declaración rendida por Luz Amparo Delgado Arias, en la audiencia de trámite y juzgamiento, en tanto que, dan cuenta la señora Clara Inés Ospina Salgado, hija de la demandante, tiene una pérdida de capacidad laboral del 67.10%, y es su madre quien vela por su sostenimiento económico y cuidado personal, pues presenta secuelas de rubeola congénita, retraso mental y es sordomuda.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la pensión ordinaria de vejez fue reconocida desde el 1° de julio de 2014, es a partir de esa calenda que deben reconocerse y pagarse los incrementos pensionales, tal como lo dispuso la a-quo.

No sale avante la excepción de prescripción en la medida en que en los términos del artículo 151 del C.P.T y S.S., no transcurrieron más de tres años desde que el derecho al incremento pensional se hizo exigible y la interposición de la demanda (8 de agosto de 2015).

El retroactivo por este concepto a la fecha de emisión de esta sentencia, asciende a $1´189.216, tal como se evidencia en la liquidación realizada por la Corporación. Se modificará por ende, el ordinal 6º de la sentencia.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

*FALLA*

1. *Modifica* el ordinal 1ºde la sentencia proferida el 8 de abril de 2016, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de la referencia, en el sentido de Declarar que la señora Ludivia Salgado Arias tiene derecho a que la prestación económica que venía disfrutando desde el 1º de agosto de 2006, mute a la pensión de vejez ordinaria de vejez con fundamento en el Acuerdo 049/90, por ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100/93.
2. *Modifica* el ordinal 2º de la sentencia, para indicar que el disfrute de la pensión ordinaria de vejez procede a partir del 1° de julio de 2015, y que el valor de la mesada pensional a reconocer a partir del año 2017, asciende a $863.216, sin perjuicio de los aumentos legales a futuro.
3. *Modifica* el ordinal 3º, en el sentido de que el valor que Colpensiones debe cancelar a título de retroactivo de las diferencias pensionales causadas entre el 1° de julio de 2014 y el 28 de febrero de 2017, corresponde a $4´499.299. En consecuencia, se revoca el ordinal 4º de la sentencia.
4. *Modifica* el ordinal 6º, en el sentido de que el valor que Colpensiones debe reconocer a la señora Ludivia Salgado Arias por concepto de retroactivo pensional causado entre el 1° de julio de 2014 y el 28 de febrero de 2017, asciende a $1´189.216.
5. *Confirma en todo lo demás.*
6. *Sin costas.*

La anterior decisión queda notificada *en estrados.*

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES

Magistrado Ponente

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA

Magistrada Magistrada

Alonso Gaviria Ocampo

Secretario

ANEXOS

LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN VEJEZ ULTIMOS 10 AÑOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DEMANDANTE*** | ***LUDILVIA SALGADO ARENAS*** | | | |  |  |  |  |  |
| ***Fecha de nacimiento:*** | | | | *15-mar-51* |  |  |  |  |  |
| ***Fecha reconocimiento pensión:*** | | | | *01/07/2014* |  |  |  |  |  |
| ***Total semanas cotizadas:*** | | | | 514,29 |  | ***Tasa Ley 100/93:*** | **NO** | ***87,00%*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO*** | | | | |  | ***Ingreso Base de cotización actualizado*** | ***IPC Dane (serie de empalme)*** | | ***Promedio Salarial (Dias x IBC actualizado/total dias)*** |
| ***Fechas de aporte*** | | | ***Número de días*** | ***Ingreso Base de Cotización*** |  | ***IPC Final*** | ***IPC Inicial*** |
| ***Empleador*** | ***Desde*** | ***Hasta*** |  |
|  | *12-abr-98* | *31-ago-98* | *139* | *350.000,00* |  | ***892.144*** | *113,98* | *44,72* | *34.447* |
|  | *01-sep-98* | *30-sep-98* | *30* | *567.000,00* |  | ***1.445.273*** | *113,98* | *44,72* | *12.044* |
|  | *01-oct-98* | *31-dic-98* | *90* | *350.000,00* |  | ***892.144*** | *113,98* | *44,72* | *22.304* |
|  | *01-ene-99* | *28-feb-99* | *60* | *350.000,00* |  | ***764.456*** | *113,98* | *52,18* | *12.741* |
|  | *01-mar-99* | *31-mar-99* | *30* | *652.000,00* |  | ***1.424.073*** | *113,98* | *52,18* | *11.867* |
|  | *01-abr-99* | *31-oct-99* | *210* | *399.000,00* |  | ***871.480*** | *113,98* | *52,18* | *50.836* |
|  | *01-nov-99* | *31-dic-99* | *60* | *402.000,00* |  | ***878.032*** | *113,98* | *52,18* | *14.634* |
|  | *01-ene-00* | *31-mar-00* | *90* | *443.000,00* |  | ***885.808*** | *113,98* | *57,00* | *22.145* |
|  | *01-abr-00* | *30-abr-00* | *30* | *711.000,00* |  | ***1.421.692*** | *113,98* | *57,00* | *11.847* |
|  | *01-may-00* | *31-dic-00* | *240* | *443.000,00* |  | ***885.808*** | *113,98* | *57,00* | *59.054* |
|  | *01-ene-01* | *31-ene-01* | *30* | *768.000,00* |  | ***1.412.131*** | *113,98* | *61,99* | *11.768* |
|  | *01-feb-01* | *31-ago-01* | *209* | *470.000,00* |  | ***864.195*** | *113,98* | *61,99* | *50.171* |
|  | *01-sep-01* | *31-dic-01* | *120* | *481.000,00* |  | ***884.421*** | *113,98* | *61,99* | *29.481* |
|  | *01-ene-02* | *31-dic-02* | *360* | *520.000,00* |  | ***888.214*** | *113,98* | *66,73* | *88.821* |
|  | *01-ene-03* | *31-dic-03* | *360* | *551.000,00* |  | ***879.654*** | *113,98* | *71,40* | *87.965* |
|  | *01-ene-04* | *31-dic-04* | *360* | *590.000,00* |  | ***884.506*** | *113,98* | *76,03* | *88.451* |
|  | *01-ene-05* | *31-dic-05* | *360* | *622.000,00* |  | ***883.887*** | *113,98* | *80,21* | *88.389* |
|  | *01-ene-06* | *31-jul-06* | *210* | *652.000,00* |  | ***883.619*** | *113,98* | *84,10* | *51.544* |
|  | *01-sep-06* | *30-sep-06* | *30* | *408.000,00* |  | ***552.940*** | *113,98* | *84,10* | *4.608* |
|  | ***01-nov-06*** | ***31-dic-06*** | *60* | ***408.000,00*** |  | ***552.940*** | ***113,9800*** | ***84,1029*** | *9.216* |
|  | ***01-ene-07*** | ***31-ene-07*** | *13* | ***375.873,00*** |  | ***487.567*** | ***113,9800*** | ***87,8690*** | *1.761* |
|  | ***01-feb-07*** | ***28-feb-07*** | *29* | ***433.700,00*** |  | ***562.578*** | ***113,9800*** | ***87,8690*** | *4.532* |
|  | ***01-mar-07*** | ***31-mar-07*** | *30* | ***434.000,00*** |  | ***562.967*** | ***113,9800*** | ***87,8690*** | *4.691* |
|  | ***01-may-07*** | ***31-may-07*** | *30* | ***433.700,00*** |  | ***562.578*** | ***113,9800*** | ***87,8690*** | *4.688* |
|  | ***01-jun-07*** | ***31-ago-07*** | *90* | ***434.000,00*** |  | ***562.967*** | ***113,9800*** | ***87,8690*** | *14.074* |
|  | ***01-sep-07*** | ***30-sep-07*** | *1* | ***434.000,00*** |  | ***562.967*** | ***113,9800*** | ***87,8690*** | *156* |
|  | ***01-jul-13*** | ***31-jul-13*** | *29* | ***570.000,00*** |  | ***581.011*** | ***113,9800*** | ***111,8200*** | *4.680* |
|  | ***01-ago-13*** | ***31-ago-13*** | *30* | ***589.500,00*** |  | ***600.887*** | ***113,9800*** | ***111,8200*** | *5.007* |
|  | ***01-oct-13*** | ***31-dic-13*** | *90* | ***589.500,00*** |  | ***600.887*** | ***113,9800*** | ***111,8200*** | *15.022* |
|  | ***01-ene-14*** | ***30-jun-14*** | *180* | ***616.000,00*** |  | ***616.000*** | ***113,9800*** | ***113,9800*** | *30.800* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***TOTAL DIAS*** | | | 3.600 |  |  |  | ***IBL*** | | 847.745 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Mesada*** | | ***737.539*** |

RETROACTIVO DE LA DIFERENCIA PENSIONAL

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IPC (Var. Año anterior)** | **Desde** | **Hasta** | **Causadas** | **Mesada reliquidada** | **Mesada anterior** | **Diferencias a cancelar** |
| 3,66 | 01-jul-14 | 31-dic-14 | 6,5 | 737.539 | 616.000 | 790.001 |
| 6,77 | 01-ene-15 | 31-dic-15 | 14 | 764.532 | 644.350 | 1.682.554 |
| 5,75 | 01-ene-16 | 31-dic-16 | 14 | 816.291 | 689.454 | 1.775.722 |
| 0,00 | 01-ene-17 | 28-feb-17 | 2 | 863.228 | 737.717 | 251.022 |
|  |  |  |  | **Valores a cancelar ===>** | | **4.499.299** |

RETROACTIVO DEL INCREMENTO PENSIONAL

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **VALOR DE LA MESADA** | **7%** | **No. MESADAS** | **TOTAL** |
| **2014** | **616000** | $43.120 | **6** | $258.720 |
| 2015 | $644.350 | $45.105 | 5,5 | $248.075 |
| 2016 | $689.454 | $48.262 | 12 | $579.141 |
| 2016 | $737.717 | $51.640 | 2 | $103.280 |
| **TOTAL** | | | | **$1.189.216** |

1. Artículo 31 Ley 100/93, establece que son aplicables al régimen de prima media con prestación definida las disposiciones vigentes para los seguiros de *invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley.* [↑](#footnote-ref-1)